

La relación entre el poder político y los negocios: origen de la perversión de la política y la democracia.*

XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales. El nuevo mapa electoral de México.
SOMEE, Guanajuato, 14-16 de noviembre de 2016.

JAIME CASTILLO PALMA**

Este trabajo parte de la consideración de que, en los dos últimos congresos de la SOMEE, su dirección ha puesto el énfasis en el balance de la reforma política del año 2014, atribuyéndole múltiples ventajas, ahora ligadas a un nuevo mapa electoral mexicano, que no necesariamente trascienden a las prácticas culturales político-electorales, pues la creación del INE, la fiscalización en línea, la paridad de género, el sufragio desde el exterior, los procedimientos sancionadores, etc., no parecen haber modificado la cultura política mostrada en los procesos de los años 2015 y 2016, ni son, tampoco, la razón de ser del nuevo mapa político electoral de México.

Por el contrario, la persistencia de las prácticas culturales político-electorales, vinculada a los negocios desde el poder, mediante la corrupción, la opacidad, la impunidad y el autoritarismo (como forma de reproducción de la clase política), explicaría más, la razón de ser del nuevo mapa político y mucho menos, las bondades de la reforma política del año 2014.

De aquí que la idea fuerza de esta ponencia sustenta que la cultura política imperante se acomodó a los cambios impuestos por el neoliberalismo (desde Carlos Salinas hasta su *retour en force* con Enrique Peña), siendo las privatizaciones y las concesiones (para el supuesto fomento de las actividades económicas, la prestación de servicios públicos y realización de la obra pública) las formas como se ha impulsado la reproducción de la clase política. Esta práctica recurrente, de interacción entre la cultura y el poder y de éste con los negocios, que precedió y dio paso a la alternancia, se reforzó a partir: 1) del agotamiento del partido hegemónico y la consecuente mengua del presidencialismo, 2) del papel que en esta coyuntura han jugado los gobernadores; 3) del papel preponderante de la mercadotecnia electoral y, obviamente; 4) de las privatizaciones y concesiones en todo lo que pueda representar un negocio para impulsar las carreras políticas de los gobernantes como una opción rentable para los poderes fácticos (incluido el del narcotráfico) y también rentable para quienes detentan las franquicias político partidarias. Las consecuencias innegables de esta práctica no sólo pervirtieron la política y desvirtuaron la democracia, sino que también acrecentaron conflictos sociales y políticos imposibles de ser regulados ante el debilitamiento del Estado.

* Este trabajo no hubiera sido posible sin la invaluable colaboración de Angelina del Carmen Flores Vargas y Alejandra Valencia Serrano quienes, bajo mi dirección, realizaron las bases de datos e hicieron los
** Universidad Autónoma de Puebla. Correl: drjaime105@hotmail.com

Entonces, mediante el estudio de caso poblano, cuestionaré: quiénes, cómo, dónde, cuándo y con qué consecuencias se involucran los actores sociales y políticos en el ámbito de las privatizaciones y concesiones y cuáles son los saldos de las prácticas culturales político-electorales originadas en la relación entre el poder político y los negocios.

Para responder a estas preguntas abordaremos tres apartados. El primero pretende explicar el avance del uso de la relación entre los negocios y el poder y sus actores, mediante las privatizaciones, las concesiones y los contratos de obra pública, como palanca de las carreras políticas de los gobernadores de la primera y segunda oleadas neoliberales. Siendo sus rasgos distintivos, antes y después de la alternancia, la intención de usar como trampolín político dicha relación para alcanzar otra candidatura o simplemente involucrarse en negocios lucrativos a costa de mayor endeudamiento. El segundo apartado pone el énfasis en las prácticas de gobierno para imponer privatizaciones y acciones de gobierno impopulares y fallidas. Sus características son el uso de la opacidad y la reserva selectiva de la información de las finanzas públicas, la ausencia de la rendición de cuentas; así como el uso y manipulación de los poderes legislativo, judicial, de las autoridades municipales, de los árbitros electorales y del frágil sistema de partidos locales. En el tercer apartado, se hace el recuento de los saldos de la relación entre el poder y los negocios, apertrechado en el autoritarismo, la opacidad, la corrupción, la impunidad, la cooptación, la represión y la violación de los derechos humanos en contra de críticos y opositores a concesiones y privatizaciones. Habida cuenta que las expropiaciones de la tierra y el agua, el deterioro del medio ambiente y del patrimonio histórico, así como el aumento del costo de los servicios concesionados y los sobrepagos del costo de las obras públicas, han generado encarcelamientos, asesinatos, golpizas, amenazas y persecuciones.

Para efectos de nuestro trabajo entendemos al neoliberalismo como una práctica tendiente a limitar el papel del Estado en la economía, ya sea eliminando restricciones (mediante la desregulación) para otorgar al sector privado el mayor número posible de actividades, privatizando empresas y servicios públicos, precarizando la fuerza de trabajo y sus derechos laborales y abriendo fronteras al flujo de mercancías y capital transnacional. Consideramos que su impacto en la gobernabilidad y en las prácticas culturales político-electorales, se ha acomodado al ritmo que le impuso un decadente partido hegemónico mediante una larga e interminable serie de reformas concretadas durante la primera oleada: telecomunicaciones, banca, infraestructura carretera e incluso al Artículo 27 constitucional, para facilitar, entre otros, los negocios vinculados al mercado inmobiliario y del suelo. A las anteriores, se adjuntan sinnúmero de reformas políticas cuyo objetivo fue simular una mínima observancia democrática, requerida por el binomio neoliberalismo-globalización mediante el cual se dio paso a las *concertaciones*, que a su vez condujeron a la creación de un preeminente, pero frágil sistemas de partidos. La clase política que se reprodujo de éste abrupto proceso, transitó el recorrido de la oleada neoliberal que, aun con la alternancia, está marcada por fallidos intentos, durante más de tres décadas, de continuismo en la aplicación de políticas neoliberales -acrecentadas con las mal llamadas reformas estructurales de la segunda oleada neoliberal- que requiere el libre mercado globalizado (reforma energética, laboral, hacendaria, financiera, educativa, transparencia, etc). Son, entonces, estas políticas neoliberales, el sustento para legitimar a los gobiernos, antes y

después de la alternancia, con las privatizaciones mediante concesiones y realización de obras y servicios públicos con participación privada.

1. EL AVANCE DE LA RELACIÓN ENTRE EL PODER Y LOS NEGOCIOS.

La progresión de las privatizaciones en Puebla está vinculada a los momentos de cambios del modelo económico neoliberal y a las rupturas y defecciones que trajeron como consecuencia el agotamiento del PRI como partido hegemónico en la entidad. Puebla, una de las cinco entidades que aportaban el mayor número de votos al PRI, tuvo una alternancia tardía pues, la primera relevante se anota al PAN, en el año 1995 (después del error de diciembre que descarriló la primera oleada neoliberal), en el municipio capital de la entidad (eje del Proyecto Angelópolis de Manuel Bartlett); y para la gubernatura estatal llega hasta el año 2011.¹ De modo que los cambios en las prácticas culturales político-electorales son diferentes, toda vez que para algunos gobernadores de la primera oleada neoliberal subsistía la cultura del presidencialismo mientras, para la segunda oleada, la mengua del presidencialismo acrecienta el poder de los gobernadores que ya no dependen del “dedazo” que determinaba al candidato a gobernador y su tutelaje. Así, hacia el final del gobierno de Manuel Bartlett, el debilitamiento de ésta práctica,² más las defecciones y rupturas priistas le impidieron imponer al sucesor. Es por eso que Melquíades Morales, contra los deseos del gobernador Manuel Bartlett, gana la candidatura del PRI y luego la gubernatura (aprovechando no sólo la coyuntura, sino también su conocimiento de los caciquismos regionales, en su modalidad de compadres). Lo mismo le sucede a Melquiades Morales, seis años después, cuando no logra influir para imponer a sus elegidos en la designación de su sucesor (incluido su ex Secretario de Finanzas, Rafael Moreno Valle), pues se impone Mario Marín, (ex Secretario de Gobernación y operador político de mano dura en los períodos de gobierno de Mariano Piña y Manuel Bartlett y Presidente Municipal de Puebla de 1999 a 2002), en un momento en el que el poder de los gobernadores está en aumento, cuestión que se constata con la constitución de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO, 2002, de mayoría priista) que se erige como nueva interlocutora frente a la Presidencia de la República de la alternancia. Mario Marín, el último gobernador del PRI, tampoco logró influir en la designación de su sucesor debido a la cerrazón de su grupo (conocido como la “burbuja marinista”), a la corrupción y al *affaire* Lydia Cacho (que evidenció el uso del cargo en defensa de patrocinadores electorales). Esta situación fue aprovechada por Rafael Moreno Valle para denostar al gobierno (del partido en el que militó varios años) durante su campaña electoral al frente de una coalición opositora que lo llevó a obtener el cargo. Más tarde, en el contexto del retorno del PRI, de la segunda oleada neoliberal, del gobierno de la alternancia y en el auge de las coaliciones se presenta el momento en el que, finalmente, un gobernador en funciones, Rafael Moreno Valle, logra imponer a su sucesor (Antonio Gali Fayad, en la *mini gubernatura*).³ Es, también, el momento cuando el gobierno registra el mayor número y monto de erogación pública por

¹ Un año antes del retorno del PRI a la Presidencia de la República, veintiuno después de la primera gubernatura de alternancia en el país y, además, de la mano de un ex priista, adherido al PAN.

² A un año de la alternancia, el Presidente Ernesto Zedillo había tomado una “sana distancia” de su partido pues estaba más preocupado por garantizar la continuidad de las políticas neoliberales que por nombrar al sucesor. (Rodríguez Araujo, 2016)

³ Por su período de duración de dieciocho meses, 2017-2018

concepto de concesiones, privatizaciones y contratos de obra, alcanzando el mayor endeudamiento de la historia poblana con fines electorales y de negocios en el que se finca el modelo de país que funda su campaña para conseguir la candidatura del PAN para las elecciones presidenciales de 2018.

Abordemos, entonces, la participación privada en las obras y los servicios públicos, de los últimos cinco gobernadores poblanos (1987-2016), a partir de la selección de 487 casos destacados (por inversión, frecuencia, efectos sociales o políticos), que aún con sus limitaciones permiten mostrar algunos rasgos generales.⁴ Cabe aclarar que se trata de una selección no exhaustiva sobre casos relevantes de participación privada que, en la medida que acrecienta su frecuencia y métodos autoritarios con los cuales se impone, resulta mayor la ya usual opacidad y ocultamiento de éste tipo información (en el último sexenio, la información financiera del gobierno ha sido objeto de una exacerbada reserva, ocultando, incluso, los argumentos en que se sustenta dicha reserva).⁵

En principio, cabe destacar la constante y considerable progresión de la participación privada en las obras y los servicios públicos, a lo largo de la primera y la segunda oleadas neoliberales. Así agrupamos:

- 41 casos para Piña Olaya, 1987-1993 (8.4% de los casos y 2.9% de la inversión);
- 60 para Manuel Bartlett, 1993-1999 (12.3% de los casos y 10% de la inversión);
- 78 para Melquíades Morales, 1999-2005 (16% de los casos y 12% de la inversión),
- 106 para Mario Marín, 2005-2011 (21.8% de los casos y 11.8% de la inversión) y;
- 202 para Rafael Moreno Valle, 2011-2017 (41.5% de los casos y 63.3% de la inversión).⁶

Destacan dos casos vinculados al uso del cargo y de las privatizaciones para la promoción de candidaturas a la Presidencia de la República: la del ex Secretario de Gobernación, ex Gobernador de Puebla, ex Senador (por el PRI) y, actualmente, Senador (por el PT) Manuel Bartlett y; la del ex Secretario de Finanzas del Estado de Puebla, ex Diputado Federal, ex Diputado local (por el PRI), ex Senador (por el PAN) y actual Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle (de coalición liderada por el PAN). El primero trató de conseguir, sin éxito, la candidatura del PRI en el año 2000, el segundo pretende la candidatura del PAN para el 2018. Ambos tuvieron como eje preponderante de sus políticas neoliberales a la capital poblana y su zona conurbada. El primero, mediante el impopular Plan de Desarrollo Regional Angelópolis y el segundo, mediante la reactivación de la actividad turística, carente de planeación y sustentada en un endeudamiento que asegura la participación

⁴ La base de datos fue elaborada con base en información proveniente de Informes Anuales de Gobierno, del Periódico Oficial del Estado de Puebla, de los portales electrónicos de la actual administración gubernamental, de las empresas contratadas, así como aquella publicada en periódicos electrónicos e impresos.

⁵ Buena parte de la información correspondiente a la gestión actual (Rafael Moreno) procede de fuentes no gubernamentales, porque en muchos casos está reservada, en concordancia con la opacidad con la cual se ha procedido. De febrero de 2011 a febrero de 2015, el gobierno de Moreno Valle había emitido 98 acuerdos de reserva. Las secretarías con más acuerdos de reserva son Infraestructura con 13, Seguridad Pública con 9, Transportes con 8 y Finanzas con un total de 7 acuerdos (Intolerancia, 2016 y e-consulta, 2016)

⁶ Los porcentajes presentados expresan los montos de la inversión en dinero constante, deflactados con base en el Índice de Precios al Consumidor, Banco de México e INEGI, con base al año 1960=100.

público-privada. Del resto de los gobernadores, como en otras entidades de la república, sólo trascienden a los medios denuncias de enriquecimiento ilícito y algunas sanciones penales o administrativas que, cuando son aplicadas recaen en sus colaboradores, es decir, ninguno de los ex gobernadores poblanos ha sido llamado a rendir cuentas.⁷

Esta progresión de la privatización combina viejas y nuevas formas que vinculan al poder con los negocios en la reproducción de la clase política basada en el clientelismo. No sólo por la legitimidad que puede dar la obra pública a los gobernantes, sino porque también, en coyunturas político electorales, es fuente de apoyos políticos y económicos. La práctica es realizada mediante el uso del poder para asignar contratos de obra pública, para facilitar el acceso a las concesiones, para aceptar los sobreprecios de las obras o el alza de las tarifas de servicios públicos privatizados y para garantizar, mediante fideicomisos y bursatilizaciones, la rentabilidad de los negocios de participación privada;⁸ ya no digamos para el enriquecimiento ilícito o los regalos ilegales. Siendo, todas estas causas, la razón del ocultamiento o la opacidad de información recabada en buena parte de los casos seleccionados.

Ahora bien, las privatizaciones, concesiones y contratos de obra pública registrados en 487 casos, de 1987 a 2016, permiten distinguir la orientación de aquéllos que han generado las mayores erogaciones y deuda para dar paso a la inversión privada. Estos remiten a:

- 1) Contratos de obra para autopistas, vialidades urbanas y puentes (23 % de los casos y 22.9% de la inversión); concesiones de autopistas (2.5% de los casos y 18.3% de la inversión); y concesiones para la reactivación del turismo (para el museo MIB, tren turístico, teleférico, gran rueda de la fortuna y contratos de obra para remodelar zonas históricas y arqueológicas (8.4% de los casos y 7.8% de la inversión).
- 2) contratos de obra para la instalación de AUDI (Plataforma y Ciudad Modelo, 3.5% de los casos y 8.4% de la inversión) y para edificios de la administración pública - donde sobresale el CIS- 2.7% de los casos y 2.6% de la inversión);
- 3) contratos de obra para servicios y equipamiento urbano: hospitales, escuelas, estacionamientos, instalaciones deportivas y de seguridad pública, de infraestructura para agua potable y saneamiento (antes de la privatización del servicio); y para la instalación del gran comercio (21.8% de los casos y 17.5% de la inversión).

⁷ Según información basada en reporte de consultoría Integralia, en los últimos quince años, catorce gobernadores mexicanos han sido investigados por autoridades federales o extranjeras por delitos de peculado, narcotráfico, lavado de dinero y asociación delictuosa: cuatro ex mandatarios están encarcelados (Armando Reynoso, PAN, Aguascalientes, peculado; Jesús Reyna, PRI, Michoacán, asociación delictuosa; Andrés Granier, PRI, Tabasco, lavado de dinero; Mario Villanueva, PRI, Quintana Roo, narcotráfico y lavado de dinero), uno está en funciones (César Duarte, PRI, Chihuahua, peculado); otro fue nombrado integrante del Servicio Exterior Mexicano (Fidel Herrera, PRI, Veracruz, peculado) cuatro fueron absueltos (Humberto Moreira, PRI, Coahuila, lavado de dinero; Juan Sabines, PRD, Chiapas, lavado de dinero; Narciso Agundez, PRD, Baja California Sur, peculado; Pablo Salazar, PRD, Chiapas, desvío de recursos). Además, hay otros tres ex gobernadores sobre los que pesan acusaciones formales, pero están en libertad: el panista Guillermo Padrés de Sonora; el perredista Marcelo Ebrard por el Distrito Federal y los priistas Tomás Yarrington, de Tamaulipas (24 HORAS, 18 de enero de 2016) y Javier Duarte Ochoa, de Veracruz, denunciado por desvío de recursos y por enriquecimiento ilícito, actualmente, prófugo de la justicia.

⁸ Prácticas como el *contratismo* (ahora conocido como *moche* y antes como *mordida*) que integra a la corrupción en la asignación de concesiones y contratos de obra pública para nutrir el clientelismo que lo sustenta.

- 4) concesiones para la prestación de servicios urbanos: recolección de los desechos y su destino final, transporte público, transportes alternos (alquiler de bicicletas, construcción de ciclovías), alumbrado público, administración del servicio de agua potable y plantas de tratamiento, saneamiento de ríos (10.1% de los casos y 3% de la inversión); y,
- 5) finalmente, concesiones federales para la instalación de gasoductos y extracción de hidrocarburos,⁹ de explotación de parques eólicos¹⁰ y para una explotación minera depredadora (26.1% de los casos y 17.1% de la inversión), origen de múltiples conflictos cada vez más y más frecuentes.¹¹

Al agrupar los 487 casos destacados de la participación privada por rama, la mayor parte de la inversión se orienta hacia la obra para infraestructura (59%), una constante para todo el período; le sigue el equipamiento urbano (28%) y los servicios públicos (7%). Mencionamos por separado a las concesiones federales mineras hidroeléctricas, eólicas y petroleras (4%) que están presentes durante todo del período analizado y son ejemplo de la intensa oposición ciudadana por el daño ecológico que causan, pues, si bien son de competencia federal, sus nocivos efectos se manifiestan localmente.

En cada período gubernamental destaca el interés en juego, respecto a la relación entre poder y negocios. Por ejemplo, Mariano Piña Olaya expropió en 1992, 1,081.5 hectáreas de cuatro ejidos para conformar la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Era su interés establecer una zona residencial de lujo construida con capital privado¹² y, para tal efecto conjuntó a las fuerzas de la policía judicial con las de seguridad pública estatales para que, mediante una violenta represión se despojara y desalojara a los ejidatarios; y usó el “carro completo” ganado en el Congreso Local, para justificar, luego aprobar la expropiación por causas de interés público¹³ y, más adelante, autorizar la venta de predios de la reserva a particulares.¹⁴ A la mencionada precedieron otras expropiaciones como las requeridas para la construcción de la Vía Atlixcáyotl en 1989 (11 has) concebida para favorecer las posibilidades de comercialización de la Reserva Territorial, luego, las expropiaciones para el Parque Industrial FINSA en 1991 (838 mil m²), destinado a favorecer a VW, al acercarle a sus proveedores en el momento que se impuso el *just on time* en los procesos productivos. Los tres procesos expropiatorios mencionados, fueron ejecutados mediante un violento trato represivo para despojar a los ejidatarios. En este período de gobierno también fue

⁹ La extracción de hidrocarburos en la zona del Proyecto Aceite Terciario del Golfo-Chicontepepec está en manos de PEMEX y las empresas extranjeras Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes y Tecpetrol.

¹⁰ La española Iberdrola cuenta con un par de permisos para instalación y explotación de parques eólicos en los municipios de Esperanza (2014) y Cañada Morelos (2016).

¹¹ Las 102 concesiones mineras otorgadas entre de 1987 y 2016 están repartidas entre 18 grupos empresariales y han afectado 206,796 hectáreas. Son preponderantes Grupo Ferrominero, Almaden Minerals, Minera Frisco, Materias Primas, Sibelco, Industrias Peñoles y Sunshine Silver Mines.

¹² A través de la inmobiliaria Prova, SA de CV. (Proceso, 1992).

¹³ Con la donación de predios a universidades privadas y la construcción del Hospital para el niño Poblano, se pretendió justificar el beneficio social de la expropiación, ante las movilizaciones legales de los ejidatarios en Secretaría de Reforma Agraria, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia.

¹⁴ El proyecto fue desechado por Manuel Bartlett, pero los terrenos expropiados fueron la base para su proyecto Angelópolis, que tampoco revirtió la donación de terrenos a universidades privadas.

construido el Aeropuerto Hermanos Serdán, concesionado al sector privado en administraciones posteriores.

En el caso de Manuel Bartlett, cuyo interés con fines electorales se mencionó anteriormente, destacan los contratos de obra para infraestructura que fueron parte del Plan de Desarrollo Angelópolis. A pesar del apoyo del gobierno federal, que destinó recursos a fondo perdido, después de treinta años de no hacerlo (Nexos, 2006), las expectativas generadas por el plan Angelópolis fueron truncadas por la crisis interna del PRI y el descarrilamiento de la primera oleada neoliberal en 1995. Ello trajo como consecuencia dejar inconcluso el proyecto y una deuda que se disparó. Además, quedaron presentes los saldos, tanto de la fallida candidatura a la Presidencia de la República, como los adversos saldos sociales, políticos y económicos originados para garantizar el negocio a los empresarios involucrados, esto es, el descontento expresado en el surgimiento de alrededor de quince organizaciones civiles que protestaron por las expropiaciones de inmuebles, suelo y agua, por la retención de las participaciones de los municipios conurbados (Ley del Federalismo Hacendario) y por el uso de la represión para imponer el impopular proyecto. También, como parte de los saldos, cabe destacar el daño por el uso político de las instituciones mediante las tradicionales prácticas de la cultura política nacional: el gobernador Bartlett, en la búsqueda de su interés electoral presidencial pasó, del “carro completo” -o *mayoriteo*- en 1992, a la pérdida del municipio de Puebla y parte del Congreso local, en 1995; al retorno del carro completo y recuperación de la alcaldía capitalina, en 1998; todo ello con la aplicación de las peores prácticas culturales político-electorales orquestadas por su operador político, Mario Marín.

La participación público-privada en esta administración prefigura el patrón a seguir en cuanto al vínculo empresarial, pues se contrata a consorcios foráneos para obras de gran envergadura y se recurre al agrupamiento de empresarios locales para obras y servicios menores; esto último le permite a Manuel Bartlett hacerse de una base local de apoyo empresarial. Así fue como la construcción del Acuaférico (sistemas Xoxtla, Nealtican y Almecatla) quedó a cargo de Consorcio Empresarial de Puebla para la Construcción y de APYCSA (empresa local también encargada del inicio de la construcción del Anillo Periférico Ecológico y la Construcción y rehabilitación del Relleno Sanitario -más adelante, Rellenos Sanitarios, SA de CV-), la recolección y transporte al sitio de disposición final de los residuos sólidos, fue concesionada a Servicios Urbanos de Puebla y Promotora Ambiental del Centro (que en 2010 sería comprada por SUP). Mientras que la construcción y operación de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales fue encargada a Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), luego concesionada a TAPSA, sociedad integrada por Trituradores Basálticos -hoy PINFRA- y Ondeo Degremont. También se permitió la intervención privada en la administración y cobranza del servicio de agua potable, la cual quedó a cargo de OMSA, conformada por ICA Constructores, Grupo Vivendir y *General Des Eaux*. Destacan los contratos de obra de infraestructura por los que se aseguraba la instalación del gran capital comercial en la Plaza Comercial Angelópolis, a cargo del Grupo Sordo Madaleno y para el Paseo del Río de San Francisco a cargo del grupo Consorcio Empresarial de Puebla para la Construcción. Al final de ésta administración gubernamental que cierra la primera oleada neoliberal de participación público-privada, se vuelve una práctica el favoritismo sexenal hacia algunos consorcios participantes. En éste caso, en

torno al Consorcio Empresarial de Puebla para la Construcción, liderado por Amado Henaine Bojalil, José Abed Rouanett y Alfonso Tenorio Castelleros.

El caso del Gobernador Melquiádes Morales, alude a quien coincidió con el primer sexenio de la alternancia que, vale mencionar, se caracteriza por el desorden financiero y el aumento considerable de la deuda pública de las entidades federativas ante la mengua del presidencialismo y el descontrol del gobierno del Presidente Fox. El aumento de la deuda estatal durante ésta gestión fue conocido popularmente como “el hoyo financiero” e involucró a Rafael Moreno Valle en su calidad de Secretario de Finanzas. Se trata de una deuda encubierta y conocida hasta el momento de hacer crisis, debido al ocultamiento de pasivos no registrados (entre 1999 y 2002), generada, según sus detractores, por el aumento de la burocracia, partidas para asesorías, promoción de imagen y aportaciones para instituciones sin fines de lucro.¹⁵ Según Melquiádes Morales, la única deuda que heredó fue originada por organismos como Carreteras de Cuota Puebla, SOAPAP y el Fideicomiso Angelópolis.¹⁶ Como consecuencia de la crisis (tras la renuncia de Moreno Valle como secretario de Finanzas) fue contratada la empresa Protego (de Pedro Aspe, ex Secretario de Hacienda del Presidente Salinas) como asesora para superar las dificultades financieras provocadas por una deuda que al año 2003, sumaba un déficit de 2,241 mdp en dinero corriente. Entre las acciones recomendadas por Protego y efectuadas por el gobierno de Melquiádes Morales estuvo la venta de terrenos de la Reserva Atlixcáyotl y del Paseo del Río de San Francisco (E-consulta, 2003); mas, seguir lo recomendado no impidió que la deuda del gobierno poblano pasara de 716.1 mdp, en el año 1999 –al final del sexenio de Manuel Bartlett- a 3,012.6, en el año 2005, cuando finalizó la gestión de Melquiádes Morales.¹⁷

En cuanto a la intervención privada en obra pública destaca la concesión del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán (2000) a Ricardo Henaine Mezher (quien también fue beneficiado en el año 2004 con la donación onerosa de un predio de 18.7 has en la Reserva Atlixcáyotl, a cambio de 10 mdp, predio que, en el año 2011 fue obligado a devolver por el gobierno de Rafael Moreno Valle, que revirtió el decreto de donación). Sobresalen las concesiones de construcción de carreteras como la Autopista Amozoc-Oriental-Perote (2003) encargada a Grupo Autopistas Nacionales (de OHL Concesiones) y la construcción de un tramo de la Carretera Puebla-Teziutlán (2000) a cargo de la Compañía Contratista Nacional (COCONAL). Durante este sexenio fue concesionado el Servicio del Alumbrado Público y la infraestructura de semáforos del municipio de Puebla (2003) a la francesa Citelum, empresa que mantiene la concesión hasta nuestros días. Otra operación llamativa en este período, es la adquisición de las cuatro plantas de tratamiento construidas por TAPSA, realizada por la paraestatal SOAPAP, cuyo costo alcanzó 764.75 mdp (2004), resalta

¹⁵ Que involucra a Luis Maldonado Venegas, primero priista, en ese tiempo Dirigente Nacional de Convergencia, luego operador de la campaña de Rafael Moreno Valle para Gobernador, después parte de su gabinete y ahora infiltrado por él en la diputación federal del PRD, con el fin de conseguir su anhelada coalición para la Presidencia de la República en 2018.

¹⁶ Deuda reconocida por la mayoría priista en el Congreso local, asumiendo que estos pasivos fueran pagados, en 2003 y 2004, con un crédito por 1500 millones de pesos e ingresos producto de la bursatilización de la autopista Vía Atlixcáyotl. Decisión plausible asumiendo que Moreno Valle en ese tiempo era priista y posible sucesor de Melquiádes Morales. (E-consulta, 2010)

¹⁷ Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

la posterior concesión de la operación de dichas plantas a la misma empresa que las vendió¹⁸, resultando TAPSA doblemente beneficiada. En este sexenio persiste el favoritismo hacia algunos empresarios beneficiándoles de la participación público-privada aunque, en adelante, ésta será transexenal, tanto para los foráneos, como para los locales.

En el caso del Gobernador Mario Marín, el interés en juego se caracteriza por el autoritarismo, la corrupción y el endeudamiento, por los sobrepagos de las obras y servicios públicos y por el uso del cargo para apoyar a sus patrocinadores electorales y prestanombres. El desprestigio, la debilidad y cerrazón de su administración fueron el telón de fondo que dio paso a la alternancia sólo posible mediante una coalición, cuyo objetivo proclamado no fuese otro que sacar al PRI de la gubernatura e involucrando a la gran mayoría de los partidos contendientes. La administración de Marín se dio a la tarea de complementar las obras truncadas del Plan de Desarrollo Angelópolis,¹⁹ así como a promover inversión público-privada orientada a la infraestructura carretera y al equipamiento.

En cuanto a infraestructura carretera y vialidad urbana destaca la ampliación de la carretera federal Chachapa-Amozoc-Tepeaca construida en el año 2006 por COCONAL, obra que mencionamos porque la empresa fue señalada como favorita y ampliamente beneficiada durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón.²⁰ Destacan, también, tres concesiones para la construcción, operación, explotación y mantenimiento de autopistas que benefician a Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) con la Autopista Libramiento Norte del Valle de México (Arco Norte) en los Estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla (2005); a PINFRA, con la adjudicación de un tramo de la Autopista Siglo XXI (Atlixco-Jantetelco, 2006) y a Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), con la entrega de dos tramos carreteros de la autopista México-Tuxpan (Nuevo Necaxa-Ávila Camacho y el Tramo Ávila Camacho-Tehuacán en el año 2007). Como ya se dijo, la administración de Marín retomó la construcción del segundo carril del Anillo Periférico, para lo cual benefició con la entrega de contratos de la obra a Aristos, Proyectos y Construcciones (APYCSA). Es importante destacar que el gasto destinado a equipamiento fue concentrado en dos obras, El Nodo Logístico Internodal La Célula (2007) en el municipio Oriental cuyo costo se estimó en 1,000 mdp y el Centro Expositor (2007) en la capital del estado que alcanzó, hasta su conclusión, hasta la gestión de Moreno Valle, alrededor de los 2,000 mdp. De ambos proyectos resultaron beneficiadas la constructora Checa, SA de CV y UPSA, respectivamente.

Mencionamos también la construcción y operación del Relleno Intermunicipal de Huejotzingo, obra otorgada a RESA (2005); la concesión con fines promocionales, para la operación y administración del Auditorio Complejo Cultural Siglo XXI (2006) a Televisión Azteca, y concesiones para el amigo y empresario favorito del gobernador Marín, Ricardo

¹⁸ Fallo de concesión del 10 de diciembre de 2004

¹⁹ Contradictoriamente, las dos obras emblemáticas de esta administración (La Célula y Centro Expositor) fueron relegadas, entre otras causas por su inviabilidad y debido al descrédito que representaba para el gobierno de alternancia sacar adelante un proyecto que caracterizaba la corrupción y fracaso de la gestión marinista (sobrecosto, mala calidad de la obra e incumplimiento de plazos de entrega).

²⁰ Propiedad de Héctor Ovalle Favela, (Intolerancia, 2011)

Henaine Mezher (quien también lo fue de Moreno Valle, durante la gestión de Morales) como la otorgada de los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán, el comodato del inmueble Mesón del Cristo (cede de su periódico El Herald de Puebla); todas, entregadas en 2010, a finales del sexenio marinista. Mientras tanto, la deuda, (datos de la SHCP, dinero corriente) pasó de 3,012.6 mdp, en el año 2005 (con Melquíades Morales) a 9,318.2 mdp en el año 2011, al término de la gestión de Mario Marín.

En el caso de Rafael Moreno Valle, el interés en juego radica en apoyar su interés político-electoral a partir de la imposición de modalidades de participación público-privada para realizar obras y servicios públicos, a costa de un endeudamiento no reconocido. Con este fin, mediante las Asociaciones Público privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) comprometió recursos públicos a largo plazo (por veinte, treinta y hasta cincuenta años) pero, además, aseguró la rentabilidad de los negocios a través de bursatilizaciones y fideicomisos como garantes de pago.²¹ Las obras construidas bajo esta modalidad de inversión público-privada han sido usadas como parte de la mercadotecnia electoral para el cultivo de la imagen de la precampaña electoral del gobernador, quien pretende la candidatura Presidencial del PAN; se oculta que fue a costa del mayor endeudamiento de la entidad, así como de las abyectas prácticas de gobierno en la entidad. De éste modo, registramos el mayor número de participación privada en obras y servicios públicos en Puebla correspondiente a la segunda oleada neoliberal.

Analizando las erogaciones más importantes para la participación público-privada en éste sexenio, hallamos una gran cantidad de negocios mediante contratos de obras y servicios públicos con participación privada cuya característica es que son operaciones puntuales, que no obedecen a ninguna planificación urbanística, ni política de desarrollo económico integral, eso sí, ni duda cabe, son negocios irrefutables para quienes están involucrados.

La concentración de la inversión en infraestructura (34.4% del total), remite al paternalismo patronal gubernamental y a la rentabilidad de los negocios para la construcción y operación de autopistas y la vialidad urbana. Es decir, la participación público-privada no va más allá de subsidiar la infraestructura y servicios requeridos para grandes empresas como Audi (como en su momento hizo el paternalismo patronal del gobierno con VW mediante la condonación de impuestos por 25 años, acceso al suelo, al agua y demás subsidios) cuya construcción de Plataforma Audi (PPS, 2012) representó un jugoso contrato de más de 5,000 mdp para la empresa CODESA.

En cuanto a infraestructura carretera y vialidad urbana destacamos: La concesión de seis autopistas (que resultó un excelente negocio por treinta años) para PINFRA, con cinco contratos: autopista Apizaco-Huauchinango (2012), autopista Virreyes-Teziutlán (2012), Vía Atlíxcáyotl (2012), Autopista Siglo XXI (Tramo Jantetelco-El Higuero, 2013) y,

²¹ El 7 de marzo del 2012, el Congreso del estado aprobó cuatro líneas de financiamiento por un monto de 7,250 mdp, pagaderos a veinte años, garantizados a través de la bursatilización de impuestos, ingresos y adelantos de participaciones federales vía Banobras; 3,500 mdp provendrán de los ingresos presentes y futuros del Impuesto Sobre la Nómina y 1,500 mdp de la bursatilización de ingresos del Instituto Registral y Catastral, que aún no se pone en marcha. (E-consulta, 2016a)

además, en sociedad con OHL, el Libramiento Elevado de Puebla (PPS, 2014) y la Autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan (PPS, 2011) a Osa, Constructora y Edificadora, filial de Oceanografía. A pesar de carecer de un plan integral de vialidad y transporte, el interés por el negocio, la búsqueda de la legitimación gubernamental y la rentabilidad electoral influyeron para realizar pavimentación con concreto hidráulico y la construcción de 19 puentes, aprovechando el histórico rezago en éste rubro. A la empresa Corporativo de Pavimentos AC20 le fueron otorgados los contratos de pavimentación de concreto hidráulico para el boulevard Hermanos Serdán (2012), la Avenida 11 Norte-Sur (2013) y construcción de la ciclovía (Periódico central, 2014) del boulevard Atlixcáyotl (2014). La pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard 5 de Mayo (2012) y la del Circuito Juan Pablo II (2013) fueron realizadas por CEMEX.

Respecto al equipamiento urbano para promover la actividad turística (18.4% del total), la falta de planeación dio paso a la puesta en práctica de ideas vagas que resultaron en ocurrencias onerosas, suntuosas y criticables por su alto costo en una sociedad empobrecida. Se trata de: La gran rueda de la fortuna “Estrella de Puebla” (PPS, 2013) cuya adquisición, colocación y operación fueron concesionadas a AyPP Constructores (de Armando Prida, considerado patrocinador electoral del gobernador); el Teleférico (PPS, 2014), proyecto a cargo de las empresas Bartholet Maschinenbau AG (Montaje y suministro del Teleférico) y Cems Constructora (obra Civil, 2014); el Museo Internacional del Barroco (2014), PPS ampliamente criticado en cuanto al costo, pertinencia cultural y arquitectura disorde con el arte barroco (Martínez, 2016), a cargo durante 23 años, de la Sociedad Museo Barroco (Integrada por Concretos y Obra Civil de Pacífico, filial del Grupo HIGA; La Peninsular Compañía Constructora y Promotora de Cultura Yaxché, ambas integrantes de Consorcio Hermes de Carlos Hank, y Operadora y Administración Técnica). Otros museos de esta gestión son la Casa de la Música de Viena (2014) y el Museo Infantil (2015), ambos ubicados en la ex fábrica La Constancia Mexicana (2014) construidos por LR Edificaciones y Supervisión; más adelante, el primero fue concesionado a Fundación Azteca acción que devela el interés del gobernador por afianzar la relación con la televisora, comenzada en la campaña electoral de 2010. Una situación similar se percibe con Televisa por la donación del predio en donde fue construido el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT, 2011) y la transferencia de recursos durante diez años para el funcionamiento del mismo, también, por la concesión del Auditorio Metropolitano (2014) a OCESA.²² En fin, LR Edificaciones y Supervisión, también estuvo a cargo de la conflictiva y criticada intervención en la zona arqueológica de Cholula,²³ dada la represión ejercida contra los opositores al daño causado al patrimonio arqueológico para realizar El Parque de las Siete Culturas en Cholula (2015). No pasamos desapercibida la construcción del Centro Integral de servicios y atención ciudadana del Gobierno del Estado -CIS- (PPS, 2011), ni el edificio de la Procuraduría General de Justicia –ahora Fiscalía General del Estado- (PPS, 2013), así como tampoco la construcción de cinco hospitales, cuatro en el

²² La Empresa operadora de centros de espectáculos que forma parte de Grupo Televisa fue beneficiada con la concesión que durante el gobierno de Mario Marín estuvo en manos de TV Azteca.

²³ Su intervención consistió en la realización de obras de mejoramiento urbano, deportivo, de esparcimiento; sustitución de pavimentación de calles, banquetas y andadores en espacios públicos de Cholula, así como la rehabilitación del ex hospital psiquiátrico de Nuestra Señora de Guadalupe en donde se instala un Museo de sitio del INAH (2015).

interior de la entidad, sobre los que ha habido múltiples denuncias públicas por falta de equipamiento.

Referente a los servicios públicos (4.8% del total) enfatizamos: En el transporte colectivo, que tuvo como interés dar paso al negocio local del Metrobús e implicó, en su inicio, asociar a los permisionarios de las líneas de autobuses retiradas de circulación; aunque no se consiguió funcionamiento eficiente (RUTA 1). En un segundo intento, se utilizó al poder judicial, para acusar, amedrentar y encarcelar a permisionarios reticentes para dar paso a los nuevos concesionarios (RUTA 2).²⁴ Como parte del sistema de transporte, es importante mencionar al Tren Turístico Puebla-Cholula (2015), cuya construcción se encuentra en proceso por Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, con la colocación de vías; Gallo Meda e *Iciglobal*, para construcción de estaciones; y, en adquisición de vagones, *Vossloh* España Sociedad Unipersonal. Otro tipo de concesiones que retomamos por ser polémicas, autoritarias y muy lucrativas, son las de Centros de Verificación Vehicular (2014), cuyo otorgamiento reemplazó a concesionarios locales por empresarios de la Ciudad de México, con licitaciones “a modo” que buscaban beneficiar al primo del Secretario de Infraestructura en turno, José Cabalán Macari.²⁵ Tampoco pasamos por alto la lucrativa concesión para operar el Programa de Monitoreo Vial (fotomultas, 2013) a cargo de la empresa *Autotraffic*.

Mención aparte merece la privatización del SOAPAP, encargado del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales de la capital y cuatro municipios conurbados (2013)²⁶. El manejo de dichos servicios quedó a cargo de Concesiones Integrales (consorcio conformado por Agua de México, Epcor y Tecnología Intercontinental), hoy Agua de Puebla, que para concursar en el proceso de licitación recibió respaldo financiero de Grupo Interacciones, perteneciente a Hermes, de Carlos Hank, beneficiado con el cobro del sistema (Status, 2014). Este servicio ya dio muestras de su eficacia como herramienta electoral, al ser autorizada la condonación de deuda a usuarios morosos, justamente durante el período de campaña de las elecciones locales de 2016. Otra concesión a destacar, por ser primera vez que al interior de la entidad se concesiona el servicio de alumbrado público mediante PPS, es el Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público (2013) en beneficio de Infraenergía (representante de *General Electric*), para renovar el sistema de alumbrado público de seis municipios, de lámparas de alógeno a equipos LED.

²⁴ Nos referimos a un par de Rutas de Transporte Articulado: la RUTA 1 (2011) Chachapa-Tlaxcalancingo, sustituyó trece rutas tradicionales; la RUTA 2 (2013) Avenida 11 Norte-Sur sustituyó 28 rutas, todas en manos de permisionarios de autobuses, bastión tradicional del clientelismo priista. CEMEX quedó a cargo de las obras de infraestructura vial, mientras que la concesión de RUTA 1 fue otorgada a Articulados de Puebla, SAPI (operación) y a ATT Maximus de Latinoamérica (cobro). Por deficiencias, la concesión fue rescatada por el organismo estatal Carreteras de Cuota Puebla. La RUTA 2, una vez desarticulada la oposición de los permisionarios, se entregó en concesión a la empresa Autobuses de Oriente (2015).

²⁵ Entre las empresas beneficiadas aparecen el Centro de Verificación Tamaulipas, Impulsora Ecológica Santa Fe, Control Ecológico Coyoacán y Servicio Ambiental Azcapotzalco. De los diez empresarios locales que concursaron en la licitación, ninguno fue aceptado. (La Jornada de Oriente, 2014)

²⁶ Puebla, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula y Amozoc.

El último grupo de concesiones a destacar, está relacionado con la seguridad pública y el interés que radica en los contratos de obra para incorporar a Puebla al Programa Nacional de Seguridad mediante: La instalación de seis Arcos de Seguridad (2014)²⁷ que han resultado caros e ineficientes; la construcción de un Cuartel Militar con Unidad Habitacional Militar incluida, para alojar a un Batallón de Infantería (que lleva como garantes de pago del préstamo a las participaciones del municipio donde se ubica);²⁸ la construcción y equipamiento del Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla (2015), a cargo de PICORP de México, ICA y Arquitectura y Diseño Residenciales de Puebla; y, por último, el criticado contrato firmado con la empresa Seguritech (2013) para adquirir *software* y equipo de vigilancia (a *Hacking Team*, a través de su filial, la israelí Kabat) da cuenta del uso de los recursos públicos para el espionaje a opositores.

En suma, por lo que se refiere a los empresarios involucrados en la participación público-privada, cada gobernador ha recurrido al favoritismo entre afines a su grupo político. Es el caso del Consorcio Poblano de la Construcción con Manuel Bartlett; de Constructora Mova con Mario Marín; o de Higa, Grupo Hermes, y AyPP Constructora con Moreno Valle. Además, destacan empresarios transexenales favorecidos como Consorcio Aristos (de la familia Abed) con diez concesiones; PINFRA y su filial TRIBASA, de David Peñaloza, con nueve concesiones; la francesa CITELUM con 6 concesiones. Es importante resaltar que las obras y concesiones más caras del período analizado (1987-2016), corresponden al gobernador Rafael Moreno Valle, cuyos beneficiarios pertenecen al grupo de empresarios mexiquenses favoritos, también, del gobierno de Peña Nieto.

Por último, a lo largo del texto, hemos insistido en que el gobierno de Rafael Moreno Valle, oculta la deuda pública toda vez que no reconoce como pasivos a los PPS.²⁹ Según datos de la Auditoría Superior de la Federación, el estado de Puebla tiene una deuda registrada ante la SHCP de 8,608.7 mdp, cantidad que se encuentra muy por debajo del total señalado en la cuenta pública estatal (porque incluye deudas de largo y corto plazo más otros pasivos) que suma 24,655.2 mdp. La diferencia entre ambos montos es de 16,046.5 mdp. Con respecto a lo anterior la Auditoría Superior de la Federación especifica que la: “(...) *diferencia se debe a que las entidades y los municipios sólo están obligados a inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios (ROEEFM), las obligaciones garantizadas con participaciones y aportaciones federales, se excluyen los pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones que no se consideran deuda pública*”(Auditoría Superior de la Federación, 2016). Por eso, para ocultar la deuda fue reformado el Artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado de

²⁷ Los Arcos de Seguridad estuvieron a cargo de Grueca, Constructora Melare, Urbanizadora ADPR, Proyecciones en obra civil y Carreteras BETA, Pavimentos y Terracerías, Constructora e inmobiliaria *Grand Land*. Su construcción buscaba frenar los delitos del fuero común y otros relacionados con la delincuencia organizada en los municipios de Atlixco, Cuapiaxtla de Madero, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Palmar del Bravo y Tehuacán, sin embargo, no fue así. (*El Popular*, 2016)

²⁸ El predio fue donado por el ayuntamiento de Xicotepec de Juárez, le generó una deuda de 70 mdp que serán pagados en quince años y tiene como garantía las participaciones federales a recibir durante ese período.

²⁹ El Secretario de Finanzas estatal (El economista, 2016) sólo reconoce tres proyectos PPS (Centro integral de Servicios, Museo Barroco y Plataforma Audi), mientras que ante la SHCP sólo aparece registrado el proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público. Nosotros señalamos a los PPS de acuerdo con la investigación publicada por el economista Eudoxio Morales (La Jornada de Oriente, 2015c)

Puebla (2012) para establecer que “*no constituyen Deuda Pública los contratos de proyectos para prestación de servicios a largo plazo*” (Periódico Oficial del Estado de Puebla, 2012). Cuestión refutada, por León Bojórquez (2013:88), quien señala que “*Las obligaciones de pago de las APP y PPS se deben considerar deuda pública, ya que toda obligación de pago lo es, sin importar el tratamiento legal estipulado en leyes en la materia*”. En conclusión, si consideramos el aumento sin precedente de la deuda pública, sin ocultamientos, en dinero corriente, el total pasó de 9,104.7mdp, al final del año 2010 (y de la gestión de Mario Marín) a 24,655.2 mdp calculados a junio del año 2016, como saldo de la gestión de Rafael Moreno Valle. Esto corrobora un desorden financiero imperante en el país debido a que el aumento de la deuda pública ocurre en todas las entidades federativas,³⁰ sea ésta acumulada por actos de corrupción, por malversación de recursos públicos o por el interés de relacionar al poder con los negocios y así obtener la imagen y los recursos que permitan promover las carreras políticas de los grupos gobernantes.

Sus consecuencias afectan al conjunto del sistema político, debilitan al Estado y no se restringen al ámbito de las coyunturas políticas que le dieron origen, sino que también afectan las prácticas culturales político electorales, cuyos rasgos abordamos a continuación.

2. PRÁCTICAS CULTURALES PARA IMPONER LA RELACIÓN ENTRE EL PODER Y LOS NEGOCIOS.

Las prácticas culturales impuestas por la relación entre poder y negocios, pervierten la política y la democracia y debilitan a las instituciones del Estado mediante el autoritarismo, la corrupción, la impunidad, la opacidad y la reserva selectiva de la información. Dichas prácticas, se expresan, entre otras, a través de la simulación, el transfuguismo, las defecciones, la manipulación, la infiltración y la coerción institucional. Se repiten, renuevan y por ello, pueden ser entendidas como producto de un proceso que proviene de una matriz de autoritarismo e impunidad, heredada del priismo y reproducida, una y otra vez, con diferente franquicia político electoral.

Éstas prácticas se manifiestan dentro del sistema político, entendido éste como “el conjunto de las instituciones grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural y se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca” (Bobbio et al, 2005:1464). Entonces, teniendo en cuenta ese marco en el cual transcurre la vida política de la sociedad y son ejercidos los poderes del Estado, podemos decir que se pervierte tanto a la política como a la democracia, toda vez que, desde un poder, el ejecutivo, se somete, subsume y tutela a los poderes públicos y autoridades municipales, y se manipula a partidos políticos, árbitros electorales y a los ciudadanos.

Éstas prácticas, ubicadas antes y después de la alternancia, están caracterizadas por la interacción de *los gobernadores*, tanto en el sistema político como en las instituciones del

³⁰ Según datos de la SHCP, la deuda acumulada en las entidades federativas durante el primer sexenio federal panista, creció 59.7%, pues pasó de 100,243.1 mdp en pesos corrientes (PC), en 2001 a 160,093 mdp (PC) en 2006. La tendencia a la contratación de deuda por parte de los gobiernos estatales y municipales incrementó para el siguiente sexenio (también gobernado por el PAN) pues de 2007 a 2012 alcanzó los 434,761.2 mdp (PC), es decir, un crecimiento de 133%. Del año 2013 al cierre del año 2015 en mitad del sexenio del retorno del PRI a Los Pinos, las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios sumaban 529,718.6 mdp (PC), lo cual representa un incremento de 11% para el período.

Estado, con el poder vinculado a los negocios. Su aplicación comienza desde la puja por conseguir nominaciones para puestos de elección popular, hasta alcanzar los ansiados puestos gubernamentales. En la medida que fue avanzando la democracia procedimental, al paso de múltiples reformas políticas, y la imposición del neoliberalismo, se abrió paso a la reproducción de una clase política que optó por la costosa mercadotecnia electoral, la incongruencia entre sus promesas electorales y sus prácticas de gobierno y por el uso de los cargos como trampolín político.

Esta clase política, aprendió, y aprendió bien, que no sólo bastaba el linaje político, sino que también requería habilidades para interactuar a favor de los intereses en juego que permitieran avanzar en la carrera “política”. Así se entiende la construcción de imaginarios neoliberales de modernidad y eficacia (mano dura y autoritarismo) que mediante negocios de participación público-privada pretenden imponer como un ejemplo de prácticas de gobierno, aquéllos que aspiran a ser candidatos a la Presidencia de la República (como ya sucedió con el exgobernador mexiquense y actual Presidente, Enrique Peña Nieto).

Veamos, entre 1987 y 2016, de qué manera y cómo se pusieron en práctica esas habilidades de interacción entre la cultura y el poder, a partir de ejemplos que revelan la forma como se usa, somete, subsume y tutela al sistema político, a poderes del Estado, autoridades municipales y a organizaciones ciudadanas para viabilizar la relación entre poder y negocios.

A) La sujeción y manipulación del sistema político por parte de los gobernadores, tiene como interés asegurar el triunfo electoral, por ende, la mayoría en el Congreso local, y el gobierno del mayor número de municipios. Para lograrlo, el gobernador y su partido requieren involucrarse en los procesos político electorales, manipulando y sometiendo al resto de los partidos políticos y a los árbitros electorales, cultivando:

- La cultura de la simulación en la concurrencia electoral, como práctica recurrente para crear una percepción de mayor competencia electoral mediante una interacción de mutuo beneficio, entre partidos mayoritarios y satelitales. Por un lado, el mayoritario obtiene más curules con la representación proporcional obtenida por los satelitales, por otro, permite a éstos últimos mantener el registro y conservar las prerrogativas financieras. En Puebla, durante la primera oleada neoliberal, se trataba de partidos de registro nacional (PFCRN, PPS, PT, PVEM, PSUM, PARM, PST), cuya toma de decisiones se ordenaba desde la cúpula central del partido. Para la segunda oleada, éstos partidos son creados *ex profeso* en beneficio del Ejecutivo y por funcionarios del mismo. Como ejemplos, mencionamos la vinculación, reiteradamente señalada, que hubo entre los ex secretarios de gobierno, Javier López Zavala (PRI) por la creación del Partido Esperanza Ciudadana (2006),³¹ hoy conocido como PSI (Pacto Social de Integración) y la de Fernando Manzanilla Prieto (PAN) por Compromiso por Puebla (2013); ambos partidos beneficiados con el mantenimiento de su registro (mediante las coaliciones) o protegidos para mantener el

³¹ Registrado con el apoyo del Tribunal Electoral local en turno, que declaró improcedentes recursos jurídicos presentados por PAN y PRD por tendencia partidista a favor del PRI, inexistencia de oficinas distritales e inconsistencias en el registro de militantes. (*Proceso*, 2006).

mayor tiempo posible sus prerrogativas mediante tácticas dilatorias;³² otro ejemplo lo hallamos en el PT, que una vez amenazada su permanencia, participó como parte de la coalición con el PAN, PANAL, Compromiso por Puebla y PSI, haciendo a un lado su presunta ideología, dando preponderancia al mantenimiento de su tambaleante registro nacional. Estos ejemplos permiten apreciar la fragilidad del sistema de partidos, relegados como son, al funcionamiento de franquicias políticas al servicio del mejor postor.

- La cultura del pragmatismo político que dio paso a las coaliciones, es una práctica recurrente en la medida que se propulsa por el agotamiento del partido hegemónico que originó rupturas, defecciones y, por supuesto, alianzas electorales. Coadyuva a lo anterior, el auge de la onerosa mercadotecnia electoral que desdibujó la percepción ideológica y programática del electorado en las elecciones, resultando también funcional a los grupos hegemónicos locales para imponer a los candidatos con la coalición que mejor acomodara a sus intereses. La progresión creciente de las coaliciones para la elección de gobernadores, en las 32 entidades federativas (dos en el año 2000, dieciséis en 2006, veintisiete en 2012 y treinta en 2013), facilitó el cambio de actores políticos de un partido a otro, dando acceso a las gubernaturas a candidatos de “oposición” en las personas de nuevos panistas, perredistas y priistas que enfrentaban a su anterior partido; por lo regular, por no haber sido nominados.³³ Si comparamos la conformación de las coaliciones poblanas entre la primera y segunda oleadas neoliberales, el cambio principal radica en el abandono o desdibujamiento ideológico, dado que para la primera oleada observamos alianzas entre partidos con ideologías afines. Mientras, en la segunda oleada neoliberal, las ideologías se hacen a un lado para que partidos, tradicionalmente opuestos, se unan solamente con el objetivo de impedir la continuidad del PRI en la entidad, tal como ocurrió con las coaliciones: Compromiso por Puebla (PAN + PRD+ PANAL+ Convergencia) para el proceso del año 2010 y Puebla Unida (PAN + PRD + PANAL + Compromiso por Puebla + PSI) para el proceso del año 2013. En fin, para la elección de 2016, destaca el realineamiento de la coalición Sigamos Adelante (2016), con la salida del PRD, como aliado de Moreno Valle, toda vez que es parte de su estrategia de campaña para el 2018 contender como candidato de coalición. Cuestión

³² Se desconoce a la fecha la fuerza electoral individual del partido Compromiso por Puebla, mas, como resultado de las coaliciones en las que ha contendido, actualmente ocupa cinco de las curules de representación proporcional en el Congreso local. El PSI de manera individual ganó en 2013 ocho alcaldías (además, cogobierna en coalición con Puebla Unida 58 más), señalado de proclividad al PRI, para el proceso de la *minigubernatura* (2016), prontamente mostró su apoyo a *Sigamos adelante* (coalición liderada por PAN) y se integró a la misma, sin embargo, perdió el registro al no alcanzar el 3% de votación individual requerido en boletas (antes de la Reforma electoral del año 2014, los votos podían repartirse por acuerdos previos a la conformación de Coalición).

³³ En el año 2000, cuatro expriistas gobernaban bajo siglas de otro partido en: Baja California Sur, Tlaxcala y Zacatecas, por el PRD, y en Nayarit por coalición PRD-PAN; para el 2006 había cuatro expriistas: en Aguascalientes y Tlaxcala, por postulación del PAN, Baja California Sur por PRD, y Chiapas por coalición PAN-PRD; además de un expanista que gobernaba Baja California Sur postulado por PRD. En el año 2012, suman cinco los gobernadores expriistas en: Chiapas y Guerrero, por el PRD; Puebla, Sinaloa -ambos, actualmente, de militancia panista- y Oaxaca, por coalición PAN-PRD-Convergencia); y, además, un experrredista en Baja California Sur, por el PAN. Incluso los principales opositores en elecciones presidenciales de 1988 y 2006, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, fueron miembros del PRI, al igual que Marcelo Ebrard; ya como fundadores y militantes del PRD, han ganado las elecciones para Jefe de Gobierno del DF por amplio margen de votación en los años 1997, 2000 y 2006, respectivamente.

que da lugar a una práctica que usa la infiltración, la manipulación y la coerción a los partidos políticos.

- La cultura del sometimiento y el tutelaje mediante la infiltración de operadores políticos (mercenarios) afines al ejecutivo para manipular a los partidos, se constituyó en práctica que cobra mayor fuerza en la segunda oleada neoliberal, dada la necesidad de controlar el sistema de partidos en el ámbito local, tanto con el fin de garantizar ventajas electorales como de neutralizar cualquier protesta que pudiera entorpecer o frenar la relación entre poder y negocios con las privatizaciones. Para el caso de la conformación de coalición que llevó al poder al candidato impuesto por el gobernador Moreno Valle, destacamos la infiltración al PRD (por el ex priista, ex dirigente nacional de Convergencia, y actual diputado federal de representación proporcional por el PRD), Luis Maldonado Venegas (además, ex Secretario de Educación Pública y ex Secretario General de Gobierno del actual sexenio), quien, sin el éxito esperado, presionó y operó para integrar nuevamente al PRD en la coalición de partidos *Sigamos Adelante*, que cobijó la candidatura de Antonio Gali Fayad (2016). Mas, una vez definida la participación individual del partido en la contienda, aprovechó la coyuntura para manifestar abiertamente su apoyo a Gali, en violación a los estatutos del partido que lo enlistó para el cargo que actualmente ostenta, demostrando así la verdadera intención que lo acercó al PRD.
- La cultura que caracteriza la frecuente práctica del cambio de un partido a otro, cuando no se alcanza la nominación o del *tránsfuga político*, ha funcionado para mantener a algunos actores en el sistema político o en los poderes del Estado; sucediendo lo mismo para las relaciones entre negocio y poder que se van tejiendo en el ámbito político electoral. Personajes de la talla del ex gobernador Manuel Bartlett (PRI a PT) o del actual gobernador, Rafael Moreno Valle (priista hasta 2006 a miembro adherente PAN a partir del mismo año) o casos tan marcados como el de Víctor Hugo Islas (PRI a PANAL), Alberto Arriaga Lila (PRI a PANAL a Convergencia); o, el más reciente, del alcalde de San Pedro Cholula (afiliado a Convergencia, gana la alcaldía en coalición con Puebla Unida) quien actualmente se declara partidario de MORENA; muestran no sólo el deseo de acceder a los puestos de elección popular por encima de ideologías o lealtades, sino también el mantenimiento de las prácticas que pervierten a la democracia y a la política por su relación con los negocios usando el cargo como trampolín.
- La cultura corporativa y clientelar, práctica tradicional en el sistema político mexicano, se utiliza y ejemplifica, en el marco de la elección de candidatos del PRI (2010). Por ejemplo, Moreno Valle aprovechó la coyuntura generada por el rechazo a las candidaturas elegidas desde arriba –o aquéllas asentidas, admitidas por la “burbuja” de Mario Marín- para atraer a los aspirantes rechazados y a descontentos que integraban algunas bases sociales y así, la coalición Compromiso por Puebla se fortaleciera con las cuotas corporativas o clientelares de los inconformes, logrando por primera vez arrebatar casi la mitad de municipios al hasta entonces, predominante PRI; después, eliminando a las voces discordantes al interior del PAN para concretar la coalición electoral con PRD (Ana Teresa Aranda es un ejemplo claro);³⁴ luego, mediante la afiliación masiva de

³⁴ Su posible candidatura a la Senaduría por el PAN en el año 2006 fue entregada a Moreno Valle. Más adelante, en 2011, atestiguó la detención arbitraria de su Secretario particular y Consejero Estatal –acusado de desvío de 700 mdp durante su gestión como alcalde de Palmar de Bravo y preso durante catorce meses-, previo a la sesión de instalación del Consejo Estatal del partido en el que Moreno Valle tomaría el control,

burócratas al PAN; y, logrado lo anterior, colocando a su esposa como Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, con miras a proclamarla candidata a la gubernatura del proceso 2018. Todo esto, reedita no sólo el corporativismo, sino también la vieja historia local de los cacicazgos políticos vinculados a los negocios.

- La cultura de la cooptación, manipulación y control político, es también una práctica tradicional, tiene como propósito, en el caso de los árbitros electorales, cooptar, manipular y controlar a quienes legitiman la toma de decisiones en la administración y validación de los procesos político electorales (Castillo, 2013). Particularmente, las actividades relacionadas con la permanencia o entrada de actores que retroalimentan, entre otras funciones, el ciclo entre poder y negocio, al validar, omitir y retrasar sanciones, resoluciones, impugnaciones y denuncias de financiamiento ilícito o adelantamientos de campaña y patrocinio, derivadas de los procesos electorales. A pesar de la Reforma Política del 2014 y sus antecedentes, no se ha logrado evitar que la selección de los Consejeros se defina desde el poder Ejecutivo. Si se pretendía restar parcialidad a favor del partido en el poder al asignar las tareas de revisión y selección de los consejeros locales al Instituto Nacional Electoral (INE), las recientes nominaciones de los Consejeros del OPLE local, dejan claro que, la práctica nuevamente sobrepasó a la Ley en beneficio del poder local. Poder que, además, tendrá en la aprobación de los presupuestos del OPLE otra forma de controlar al organismo (tampoco pasemos por alto la asignación de bonos como un modo de compensar el trabajo realizado en beneficio del grupo en el poder). Como casos destacados podemos mencionar, la conformación de la Comisión electoral en el año 1994, derivada de la reforma electoral impulsada por Manuel Bartlett en la entidad, que puso en manos de una Comisión especial de Diputados el proceso de selección de los integrantes de la Comisión Electoral; proceso que terminó en la presentación de candidatos producto de una cuota partidaria, llevando a la violación de los procedimientos (recién estrenados), pero asegurando al PRI el control del órgano electoral.³⁵ Resulta revelador, también, el reciente proceso de selección de Consejeros del OPLE que, no por quedar en manos del Consejo General del INE, impidió la filtración de candidatos, pues de siete perfiles elegidos, cuatro son afines al Gobernador, incluido el Consejero Presidente (La Jornada de Oriente, 2015b).

B) El sometimiento, la sumisión y sujeción de los poderes del Estado, por parte de los gobernadores, tiene como interés anular la separación de poderes con la intención de imponer la mayoría que requiere una actividad legislativa y judicial a modo. De ello depende la formalización legal de las decisiones y la utilización del recurso de la fuerza pública, en casos de movilización social que se oponga. De modo que para lograr sus objetivos se recurre a:

- La cultura autoritaria que anula la democracia al subsumir a los poderes del Estado cuando recurre a la práctica popularmente conocida como *mayoriteo*, que caracteriza la

para luego ser ungido candidato. En el año 2015, tras más de cuarenta años de militancia, declaró su renuncia al albiazul para no pertenecer a un PAN que “miente, embauca y corrompe” declarada y reiterada su negativa a contener en coalición con el PRD.

³⁵ El control de la Comisión y el del Tribunal Estatal Electoral se manifiesta en la serie de acusaciones de parcialidad de los árbitros, por parte de los partidos de oposición (principalmente PAN) realizadas en el contexto del proceso electoral de 1995 y en el actuar de los mismos con demostrado sometimiento al férreo control estatal ante conflictos como el de la alcaldía de Huejotzingo que requirió (demostrado el sometimiento al gobierno estatal) la intervención del órgano afín del plano federal (Arroyo y Ruiz, 2004)

forma en que se usa al Congreso local para legislar a modo. Así, a pesar de que en la segunda oleada neoliberal ocurrió el desplome del “carro completo” del PRI en el Congreso local, el *mayoriteo* legislativo se aseguró y utilizó en su momento, para dar sustento legal a las aspiraciones del gobernador en turno. Lo mismo para aprobar expropiaciones ilegales (Mariano Piña, despojos Atlixcáyotl-Quetzalcóatl), para asestar golpes a la oposición (Ley del Federalismo Hacendario de Manuel Bartlett)³⁶ o para aprobar rescate de entidades públicas (como la deuda de SOAPAP durante el gobierno de Melquíades Morales). Luego, la pérdida de la mayoría priista en el Congreso y la conformación de un nuevo *mayoriteo* de coalición fueron situaciones aprovechadas por el gobernador Moreno Valle para lograr la creación y aprobación de leyes tendientes a dar cauce legal a la privatización de servicios públicos como: la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios (2011), la Ley de Deuda Pública -a la que ya nos referimos (2012)-, la Ley Estatal de Agua (2012) y la Ley de Expropiaciones (2014); la popularmente conocida como Ley bala para contener el descontento social y permitir el uso legítimo de la fuerza pública por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado; para contener la crítica por los gastos realizados, controlar e inhibir el acceso a la información, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2011 y su armonización con la Ley federal 2016) que junto con la armonización federal de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla (2016) fueron aprovechadas para mantener a elementos afines al gobernador por períodos posteriores al término de la gestión.

- Con el Congreso a modo, se abre la posibilidad de influir en la elección de otros agentes del sistema político, que resultan piezas clave como parte del blindaje para evitar posibles inconvenientes legales; por si es cuestionada la cuantiosa deuda pública o para evitar cualquier denuncia en caso de ser candidato a la Presidencia de la República (tal como ocurrió con la fallida legislación para blindar a los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua (Expansión, 2016). De aquí que se haya asegurado la ratificación de nombramientos de sus incondicionales. De tal modo que:
 - El Fiscal General del Estado³⁷ fuera ratificado en el cargo hasta el año 2022. Víctor Carrancá Bourget ha sido señalado, por parte de organizaciones civiles, de fabricar delitos a los disidentes del gobierno estatal y de que en el sexenio se cuente más de 250 presos, procesados y hostigados en violación a sus Derechos Humanos.
 - El Auditor Superior del Estado. David Villanueva Lomelí³⁸ ha sido denunciado públicamente por coerción debido a la no aprobación de cuentas públicas de las administraciones municipales de la oposición, ya sea partidaria o de rechazo a las prácticas de gobierno.³⁹

³⁶ Por la que el gobernador estableció criterios concretos de distribución de fondos federales destinados a municipios, afectando con ello la entrega de participaciones a municipios en manos de la oposición como el de Puebla (PAN).

³⁷ Es la armonización de la Ley Federal para la Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal por el que desaparece la Procuraduría General de Justicia del Estado y se crea la Fiscalía del Estado

³⁸ Además, beneficiado con contratos de obra pública en su compañía constructora Escala, Espacio e Imagen Oficina de Arquitectura, SA de CV.

³⁹ Una revisión rápida a los resultados presentados por la Auditoría Superior del Estado, que presentan el estado de avance de la revisión de la cuenta pública estatal, muestra que los trabajos de revisión de cuenta pública de los municipios por parte del Congreso no siguen un orden riguroso y que pueden estar ajustados a la práctica de la revisión de la cuenta pública como “garrote político”, pues de 239 cuentas en el estatus de

- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La designación de Adolfo López Badillo⁴⁰ es otro ejemplo de nombramiento de personajes afines o cercanos al gobernador Rafael Moreno Valle, porque al igual que los anteriores funcionarios mencionados este nombramiento fue aprobado por mayoría en el Congreso (29 votos a favor y 3 en contra) sin discusión de por medio, y pese a la desaprobación por parte de organizaciones civiles y ONG que insistieron en los vínculos del ombudsman con el entonces presidente de la Gran Comisión del Congreso así como su cercana relación con Juan Pablo Piña, funcionario morenovallista e hijo del ex gobernador Mariano Piña.
- El nombramiento de los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Como el de Federico González Magaña, quien fue mantenido en el cargo a pesar de las denuncias de organizaciones de transparencia por reservar información pública y de las constantes denuncias en medios y por medios de comunicación, por opacidad (Aroche, 2015). Actualmente, quien se caracterizó por obstaculizar la transparencia –en lo relacionado al gobierno estatal– se desempeña como Consejero del OPLE.)

Estas prácticas culturales de gobierno forman parte del entramado mediante el cual se ha impuesto la participación público-privada para imponer privatizaciones y acciones de gobierno impopulares y fallidas cuyos saldos exponemos a continuación.

3. LOS SALDOS DE LA RELACIÓN ENTRE EL PODER Y LOS NEGOCIOS

Los saldos de ese entramado de interacciones en el que se sustenta la relación entre el poder y los negocios, en el caso que nos ocupa, están en el origen del debilitamiento del Estado, la desvirtuación de la democracia y la perversión de la política. Se desvirtúa la democracia, al anular la separación de los poderes del Estado y, así mismo, se pervierte al sistema político y a los árbitros electorales al manipular y someter su funcionamiento al interés en juego de quien detenta el poder ejecutivo. Lo cual, indefectiblemente, afectará el respeto al sufragio universal, la libertad de expresión, la libertad de prensa y, destacadamente, a los derechos humanos. Cuestiones, que generan un persistente rezago de los liderazgos políticos y que se constituyen en un impedimento para la construcción de la ciudadanía.

Decía Pablo González Casanova (1977), que la democracia en México tenía como obstáculo al presidencialismo. Sin embargo, con la llegada de la alternancia a la Presidencia de la República (2000), mengua el presidencialismo, pero no se supera el obstáculo y, aún más, se diluye el único control y contrapeso político que era ejercido por el Presidente respecto a los gobernadores.⁴¹ Factor decisivo para que los gobernadores obtuvieran, en la

“inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades”, el 66% corresponde a ediles de filiación opositora, mientras que sólo el 34 corresponde a ediles de filiación panista o *coalicionista*.

⁴⁰ Destaca, en su actuar, la omisión en cuanto a la violación a los derechos humanos hacia el nonagenario Delfino Flores, quien falleció mientras purgaba condena en el Centro de Readaptación Social de San Miguel, luego de su detención en un operativo de desalojo violento de predio identificado como parte de los bienes nacionales.

⁴¹ Señala Luis Carlos Ugalde (2010) “a él (el Presidente) debían su postulación como candidatos y él podía removerlos del cargo. Y luego agrega. “entre 1964 y 2000 hubo 49 remociones” de gobernadores por razones políticas; sólo durante el sexenio de Salinas de Gortari hubo 12”.

segunda oleada del neoliberalismo, mayor poder sin tener que rendir cuentas, además de la usual práctica de fusionar y subsumir el control de los poderes del Estado.

La discrecionalidad con la que actúan los gobernadores les permite, no sólo impedir la rendición de cuentas, sino también asegurar la imposición de su sucesor y de funcionarios (Fiscal General del Estado, Auditor Superior del Estado, Presidente de la de la Comisión de Acceso a la Información Pública o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos), que les pueden cubrir las espaldas. Ha permitido, también, la reedición de la práctica del dedazo para seleccionar al sucesor del gobernador y a lo anterior, se ha sumado el uso de recursos públicos para apoyar la elección de diputados afines en otras entidades federativas con el objeto de asegurar una base de apoyo en las cámaras con fines político electorales para las elecciones de 2018.⁴²

Entre los saldos de la relación entre el poder y los negocios se observa también el grado de deterioro del pacto federal, puesto que ha permitido a los gobernadores (a pesar de la inversión en infraestructura para la seguridad pública), hacer caso omiso de la inseguridad y el aumento de la violencia. Además de feminicidios, secuestros y linchamientos, un ejemplo destacado en Puebla es el robo de gasolina por el crimen organizado, al que no se ha atendido arguyendo que se trata de un asunto federal; no obstante que directivos de los cuerpos policiacos de la entidad están coludidos.⁴³

Por último, destaca la obstaculización a la construcción de ciudadanía, manifestada en la conformación de luchas y movimientos de resistencia social contra las privatizaciones durante la primera y segunda oleadas neoliberales. Los movimientos de resistencia enfrentan la falta de interacción con los poderes del Estado (controlados y sometidos por el poder ejecutivo), que les obliga a buscar respuesta en gobernación federal y en instituciones defensoras de los derechos humanos.

El entramado construido para contener la resistencia social y el descontento popular por las privatizaciones, está hecho para impedir el diálogo con los afectados. En la entidad, un buen número de organizaciones, en la primera y segunda oleadas, han sufrido violentas represiones. El mayor número de organizaciones que protestaron de manera organizada contra las privatizaciones generaron, alrededor de 15 organizaciones durante la gestión de

⁴² El gobernador Rafael Moreno Valle realizó, durante varios fines de semana, viajes a diversos estados de la república durante la campaña electoral del proceso federal del año 2015, para apoyar a su partido político, pero de los doce estados visitados (en donde respaldó a candidatos a gobernadores, a candidatos a alcaldías y a candidatos a diputados) solamente siete ganaron alguna elección. (La Jornada de Oriente, 2015a)

⁴³ La Secretaría de Seguridad Pública en el estado confirmó la detención de Marco Antonio Estrada López, director de la Policía Estatal Preventiva y Tomás Mendoza Lozano, jefe de grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, para ser presentados ante el Ministerio Público Federal, al estar relacionados con el robo de hidrocarburos (E-consulta, 2015). Datos de PEMEX (2015) exponen 1,685 tomas clandestinas para el robo de combustible en Puebla, detectadas en 26 de los 217 municipios del estado en los últimos quince años (De enero de 2000 a diciembre de 2015), estos datos abiertos muestran un aumento de 91.5% de tomas clandestinas en los últimos cinco años (2011 a 2015), con respecto a los años anteriores (2000 a 2010). Los datos del año 2015 (815 tomas clandestinas) remarcen que la situación empeoró en el estado de Puebla, pues las tomas clandestinas usadas para el robo de combustible incrementaron un 263% con respecto al 2014 (309 tomas clandestinas).

Manuel Barttlet y suman 27 con Moreno Valle. Vale la pena detenerse en éste último gobernador por las motivaciones innegables de su interés y sus prácticas de gobierno autoritarias y de mano dura para figurar, a costa de lo que sea, entre los contendientes a la presidencia, para las elecciones de 2018.

Los saldos de la represión originada contra las privatizaciones realizadas por Moreno Valle, dan cuenta de cómo afecta a la ciudadanía la lucha, por la defensa de la tierra el agua, el medio ambiente, el derecho al trabajo, contra la destrucción el patrimonio histórico y contra el alza constante de los servicios públicos privatizados. El recuento de casos de hostigamiento, persecuciones, asesinatos y encarcelamientos es impactante. Durante el actual gobierno estatal, hasta el 29 de septiembre de 2015, encontramos 256 opositores afectados por su oposición a la aplicación de las políticas neoliberales dictadas en ámbitos federales o estatales.

A pesar de que el gobierno poblano declara que no existen personas perseguidas por sus ideas políticas o ideológicas, la realidad es que actualmente suman 13 personas presas por oponerse a programas y disposiciones del ámbito estatal (uno por oponerse al retiro de concesiones de transporte colectivo para dar paso al sistema RUTA, en su línea 2; cinco, por decomiso de mototaxis, uno por control sindical, cuatro pertenecientes a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, por activismo contra las privatizaciones, y dos por demandar destitución del edil reiteradamente señalado de malversación de fondos) además, 164 procesados, seis personas en libertad con reservas de ley (universitarios acusados de colocar bombas *molotov* en estación de Metrobús y oficinas centrales del IEE, previo a proceso electoral local del año 2014); 34 personas con órdenes de aprehensión liberadas (en algunos casos pesan más de una sobre la misma persona); dos con reclusión domiciliaria (por operativo de decomiso de mototaxis y rechazo a liberación de concesiones de transporte); otro más que falleció mientras purgaba condena en prisión (Delfino Flores, por defensa de suelo para vivienda popular); un sentenciado político (alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan); cinco liberados por desvanecimiento de pruebas, (Enedina Rosas liberada, con el apoyo de Amnistía Internacional, opositora en el municipio de Atlixco a la instalación del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, Rosalina Carpinteyro, a cambio de acuerdo de liberación de concesiones de transporte y Martín Camacho, quien echó abajo las acusaciones –anónimas- por maltrato y tráfico de especies), un par de estudiantes acusados de motín por publicar en redes sociales que intentarían boicotear desfile del 5 de mayo en 2013; un opositor asesinado (Antonio Esteban Cruz, líder de movimiento campesino de rechazo a instalación de hidroeléctrica en Cuetzalan) y 29 que han declarado públicamente haber sido agredidos u hostigados por manifestar apoyo a los movimientos de resistencia u oposición (entre ellos profesores universitarios).

De nuestra base de datos (que aún se encuentra en construcción) de presos de conciencia, reprimidos, perseguidos u hostigados por su rechazo a la aplicación de políticas gubernamentales suman 256 personas, que en relación con el ámbito del que proviene el asunto o conflicto de rechazo se reparten en 130 del ámbito estatal, 72 del federal y 54 de origen municipal. De este total se presentaron 202 detenciones, en las que fueron denunciadas violaciones a los derechos humanos y uso de violencia: 140 durante disolución de protestas, desalojo de plantones y predios; 47 arrestos con cateo de las viviendas y

sometimiento de sus habitantes, nueve detenciones se llevaron a cabo mediante engaños (como el de Rubén Sarabia ‘Simitrio’ y los alcaldes de Canoa y La Resurrección, a quienes citaron o llamaron bajo el pretexto de atender asuntos relacionados con sus demandas), cinco durante operativos policiales y uno detenido en su centro de trabajo.

Ya desde 2012, Amnistía Internacional señalaba que “Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas” (Amnistía Internacional, 2014), lo anterior coincide con las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el año pasado: “la grave crisis de derechos humanos (...) está caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad” (La Jornada, 2015). En el estado de Puebla, a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido 1,312 recomendaciones de 1994 a 2016,⁴⁴ el saldo en materia de procuración de justicia y de respeto a los derechos humanos, resultado de la relación entre el poder, la política y los negocios “(...) queda al arbitrio de los intereses que derivan de las acciones que emprenden las élites que encarnan el poder y la política para moldear el derecho y la legalidad”. Así es como se marca “el contraste que brinda la actuación de las autoridades, eficiente para encarcelar al disidente de las políticas de gobierno e ineficiente para perseguir al delincuente” (Porrás, 2016).

CONCLUSIONES

El caso de Puebla representa la cultura política que caracteriza el modelo neoliberal de la relación público-privada en obras y servicios públicos, mediante el uso del clientelismo empresarial, el sometimiento y tutelaje de los poderes públicos y las autoridades municipales, así como la manipulación del sistema político y de los ciudadanos.

A diferencia de otros casos de autoritarismo, corrupción e impunidad que condujeron a la modificación del mapa político mexicano (en donde los corruptos gobernadores y sus franquicias electorales resultaron insostenibles), el caso poblano muestra la otra cara de la misma moneda. Aquí, la rentabilidad de los negocios de la asociación público-privada, con fines político electorales, pretende erigirse en modelo neoliberal de modernidad y eficacia (mano dura, impunidad, corrupción y autoritarismo), no obstante pervertir la política y la democracia en favor de los actores involucrados.

El clientelismo empresarial en el que se sustenta la relación público-privada ha evolucionado rápidamente. Pasó de ser una necesidad para constituir una base de apoyo local que concurría con grandes empresas nacionales, a convertirse en clientelismo transexenal, que luego fue incorporando a empresas transnacionales y nacionales vinculadas al gobierno de la república en turno. La rentabilidad de estos negocios de participación público-privada, queda garantizada mediante fideicomisos, bursatilizaciones y concesiones, cuyo largo período de duración y margen de ganancia podría rebasar ampliamente el período de las franquicias electorales de los gobiernos que les contrataron.

⁴⁴ De las cuales 930 dirigidas autoridades municipales, 304 a la Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública (a éstas 16.7% corresponde al actual gobierno) más 78 a otras dependencias estatales.

La progresión de la participación público-privada de la primera y segunda oleadas neoliberales ha ido de la mano con el vertiginoso endeudamiento y ésta, en total correspondencia con la cultura política que caracteriza:

- el súbito aumento de las coaliciones político partidarias;
- el pragmatismo electorero que desdibuja la ideología;
- el cultivo de la imagen de precandidatos y candidatos que impone la costosa mercadotecnia electoral, magnificando los logros de la relación entre el poder y los negocios;
- la creación de partidos locales controlados por los gobernadores y la infiltración de partidos políticos y de árbitros electorales por operadores gubernamentales;
- el ilegal uso del adelantamiento de los tiempos de campaña y el rebase de los topes de financiamiento (plausiblemente) mediante recursos provenientes del *contratismo* y de las privatizaciones de obras y servicios públicos.

La participación público-privada incide, también, en el aumento de la usual práctica gubernamental que fusiona los poderes públicos para poder legislar e impartir justicia a modo. Igualmente, la relación entre el poder y negocios, incide en la práctica de imponer nombramientos de funcionarios públicos que exceden el período de gobierno de quien los designa para blindar posibles demandas legales o consecuencias políticas.

El aumento de las expropiaciones de la tierra y el agua, los daños causados al medio ambiente y al patrimonio histórico, los constantes aumentos a los servicios públicos privatizados y la negación de los derechos constitucionales, para dar paso a la participación público-privada, han generado una resistencia social constantemente reprimida. Resultado de un comportamiento gubernamental autista, que se mantiene en constante campaña en medios para negar la existencia de presos políticos y establecer cercos informativos. Podría decirse que la ausencia de interacción de los ciudadanos con partidos políticos y poderes públicos fusionados, reduce al gobierno a un papel de gerente de negocios rentables con fines lucrativos, contradictoriamente de alcances políticos y electorales.

Como hemos visto, cuando la reproducción de la clase política depende de la relación entre el poder y los negocios se devela un modelo eficaz para acceder a cargos de elección que generan un ciclo que estrecha las posibilidades de cambio democrático. Pues, al relegar al ciudadano, reducir el salario indirecto y obstaculizar el margen de acción ciudadana (servicios caros y deficientes, desconfianza en las instituciones, represión, carencia de árbitros parciales, etc.) se van coartando, cada vez más, las posibilidades de construcción de ciudadanía.

Por tales razones, cabe considerar que la reforma política del 2014 y el resto de las que le antecedieron, no parecen modificar la cultura política, toda vez que el proceso mediante el cual se repiten y renuevan las prácticas culturales político electorales durante la segunda oleada neoliberal, involucra al conjunto del sistema económico, político y social, es decir, a las prácticas de gobierno, respecto al funcionamiento de los poderes del Estado y del sistema político en su conjunto. Por tanto, el nuevo mapa político estaría más vinculado a la relación entre el poder y los negocios sustentados en la corrupción, el autoritarismo y la impunidad.

Siglas y acrónimos.

APP: Asociación Público Privada
APYCSA: Aristos, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
CIS: Centro Integral de Servicios
COCONAL: Compañía Contratista Nacional, S.A.P.I. de C.V.
CODESA: Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe, S.A. de C.V.
CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores
DF: Distrito Federal
GMD: Grupo Mexicano de Desarrollo
ICA: Ingenieros Civiles y Asociados, S.A. de C.V.
IDEAL: Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. de C.V.
INDETEC: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia
INE: Instituto Nacional Electoral
MIB: Museo Internacional Barroco
MDP: Millones de pesos
OCESA: Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V.
OHL: Obrascón Huarte Lain
OMSA: Operación y Mantenimiento de Sistema de Agua
OPLE: Organismo Público Local Electoral
PAN: Partido Acción Nacional
PANAL: Partido Nueva Alianza
PARM: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PASA: Promotora Ambiental del Centro, S.A. de C.V.
PFCRN: Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PINFRA: Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V.
PPS: Proyecto de Prestación de Servicios
PRD: Partido de la Revolución Democrática
PRI: Partido Revolucionario Institucional
PSI: Pacto Social de Integración
PST: Partido Socialista de los Trabajadores
PSUM: Partido Socialista Unificado de México
PT: Partido del Trabajo
PVEM: Partido Verde Ecologista de México
RESA: Rellenos Sanitarios, S.A. de C.V.
ROEEFM: Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios
RUTA: Red Urbana de Transporte articulado
SAPI: Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SOAPAP: Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla
SUP: Servicios Urbanos de Puebla, S.A. de C.V.
TAPSA: Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de C.V.
TRIBASA: Trituradores Basálticos, S.A. de C.V.
UPSA. Unión Preforzadora, S.A. de C.V.
VW: Volkswagen de México, S.A. de C.V.

Bibliografía.

- AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2014). “Los retos de México en materia de derechos humanos, Memorándum de Amnistía Internacional para el Presidente Enrique Peña Nieto”. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wpcontent/uploads/2014/07/Mexico_los_retos_en_materia_de_derechos_humanos_18_02_2014.pdf
- AROCHE, Ernesto. (2015). “González Magaña, un soldado del morenovallismo”, *Lado B*, 26 de octubre de 2015. Disponible en: <http://ladobe.com.mx/2015/10/gonzalez-magana-un-soldado-del-morenovallismo/>.
- ARROYO Israel y Rodolfo RUIZ. (2004). *La legitimidad fragmentada. Transición e institucionalidad en Puebla*, UAP / Plaza y Valdés, Puebla.
- AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. (2016). *Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2016*, p. 164. Disponible en: http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/ANALISIS_DEL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2016.pdf.
- BOBBIO, Norberto, Nicola Matteucci y Jean Franco Pasquino. (2005). *Diccionario de Política*, Siglo XXI editores, México, pp. 1464.
- BOJÓRQUEZ LEÓN, César. (2013). *¿Cómo Operan las APP y PPS en las Entidades?: Aspectos Jurídicos y Financieros*, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Guadalajara, Jalisco, 2013, Revista Federalismo Hacendario No. 178, pp. 82-92. Disponible en: <http://132.248.9.34/hevila/INDETECFederalismohacendario/2013/no178/8.pdf/>.
- CASTILLO PALMA, Jaime. (2013). *Cultura política y órganos locales electorales*, en XXIV Congreso SOME. Federalismo electoral: experiencias locales. Zacatecas 6, 7 y 8 de Noviembre de 2013.
- DIARIO 24 HORAS. (2016). “Van 14 ex gobernadores acusados de peculado en 15 años”, 18 de enero de 2016. Disponible en: <http://www.24-horas.mx/van-14-ex-gobernadores-acusados-de-peculado-en-15-anos/>.
- E-CONSULTA. (2003). “No le salen a Melquiádes las cuentas”, 6 de octubre de 2003. Disponible en: <http://anuario.e-consulta.com/index.php/2003el/item/no-le-salen-a-melquiades-las-cuentas>
- E-CONSULTA. (2010). “Las netas del ‘hoyo financiero’ en la gestión de Melquiádes”, 23 de mayo de 2010. Disponible en: <http://archivo.e-consulta.com/blogs/corte/?p=591>.
- E-CONSULTA. (2015). “Cae director de la policía en Puebla por robar combustible”, 14 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.e-consulta.com/nota/2015-07-14/seguridad/aseguran-director-de-la-policia-estatal-por-robo-de-combustible>
- E-CONSULTA. (2016a). “Hipoteca Puebla el gobernador en fideicomiso privado de Pedro Aspe”, 2 de febrero de 2016. Disponible en: <http://www.e-consulta.com/nota/2016-02-02/gobierno/hipoteca-puebla-el-gobernador-en-fideicomiso-privado-de-pedro-aspe>
- E-CONSULTA. (2016b). “Reserva información de 4 años nueva Ley de Información”, 2 de mayo de 2016. Disponible en: <http://www.e-consulta.com/nota/2016-05-02/gobierno/reserva-informacion-de-4-anos-la-nueva-ley-de-transparencia>
- EL ECONOMISTA. (2016). “Puebla aclara que sólo debe \$6,420 millones por PPS”. 24 de febrero de 2016. Disponible en: <http://eleconomista.com.mx/estados/2016/02/24/puebla-aclara-que-solo-debe-6420-millones-pps/>.
- EL POPULAR. (2016). “Arcos de seguridad de Puebla dejan pasar la delincuencia”, 10 de julio de 2016. Disponible en: <http://www.elpopular.mx/2016/07/10/local/arcos-de-seguridad-de-puebla-dejan-pasar-la-delincuencia-147320>
- EXPANSIÓN. (2016). “La PGR impugna blindajes de gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua”, 11 de julio de 2016. Disponible en: <http://expansion.mx/nacional/2016/07/11/la-pgr-impugna-blindajes-de-gobernadores-de-quintana-roo-y-veracruz>
- GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. Informes de gobierno de Mariano Piña Olaya, 1987-1993.
_____. Informes de gobierno de Manuel Bartlett Díaz, 1993-1999.
_____. Informes de gobierno Melquiádes Morales Flores, 1999-2005.
_____. Informes de gobierno Mario Marín Torres, 2005-2011.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. (1977). *La democracia en México*, Nueva Era, ciudad de México.
- INTOLERANCIA DIARIO. (2011). “¿Otra vez Coconal?”, 2 de noviembre de 2011. Disponible en: <http://intoleranciadiario.com/detalleOpinion/488/otra-vez-coconal>

- INTOLERANCIA DIARIO. (2016). "El gobierno de Moreno Valle es uno de los más opacos: AMEDI", 9 de marzo 2016. Disponible en: http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/142109/politica/el-gobierno-de-moreno-valle-es-uno-de-los-mas-opacos-amedi.
- LA JORNADA. (2015). "Grave crisis de derechos en México: CIDH; el gobierno refuta conclusión", 3 de octubre de 2015. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2015/10/03/politica/005n1pol>
- LA JORNADA DE ORIENTE. (2014). "Los centros de verificación vehicular se entregaron a empresas de DF y Kahwagi", 17 de julio de 2014. Disponible en: <http://www.lajornadadeorient.com.mx/2014/07/17/los-centros-de-verificacion-vehicular-se-entregaron-a-empresas-de-df-y-kahwagi/>
- LA JORNADA DE ORIENTE. (2015a). "Fracasa activismo de RMV a nivel nacional", 9 de junio de 2015. Disponible en: <http://www.lajornadadeorient.com.mx/2015/06/09/fracasa-activismo-de-rmv-a-nivel-nacional/>
- LA JORNADA DE ORIENTE. (2015b). "Fracasa reforma electoral en Puebla; Moreno Valle controlará al OPLE", 2 de noviembre de 2015. Disponible en: <http://www.lajornadadeorient.com.mx/2015/11/02/fracasa-reforma-electoral-en-puebla-moreno-valle-controlara-al-ople/>
- LA JORNADA DE ORIENTE. (2015c). "PPS son deuda porque se pagarán con presupuesto estatal, ratifica Morales", 8 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.lajornadadeorient.com.mx/2015/12/08/pps-son-deuda-porque-se-pagaran-con-presupuesto-estatal-ratifica-morales/>
- MARTÍNEZ, Salma. (2016). "El Museo Barroco Internacional de Puebla: tendencias y peligros", *Nexos*, 4 de febrero de 2016. Disponible en: <http://cultura.nexos.com.mx/?p=9802En%20caché>
- NEXOS. (2006). "Corrupción y abuso de poder", 1 de mayo de 2006. Disponible en <http://www.nexos.com.mx/?p=11881>.
- PERIÓDICO CENTRAL. (2014). "Empresa fantasma construyó en Puebla la ciclopista más cara del país", 25 de noviembre de 2014. Disponible en: <http://www.periodicocentral.mx/2014/gobierno/empresa-fantasma-construyo-en-puebla-la-ciclopista-mas-cara-del-pais>
- PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. Gobierno del Estado de Puebla, (1987-2016). Varios números.
- PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA (2012). *Reforma al artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla*, 19 de septiembre de 2012.
- PORRAS RUGERIO, Samuel. "Puebla: legalidad y presos políticos" en *La Jornada*, 10 de noviembre de 2016. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2016/11/06/opinion/017a2pol> Consultado el 10 de noviembre de 2016.
- PROCESO. (1992). "Quieren pagar 300 millones por tierras que valen 45,000. Proyecto de Piña Olaya para hacer con amigos 'la nueva Puebla' en predios ejidales", 26 de diciembre de 1992. Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/160777/quiere-pagar-300-millones-por-tierras-que-valen-45000-proyecto-de-pina-olaya-para-hacer-con-amigos-la-nueva-puebla-en-predios-ejidales>.
- PROCESO. (2006). "Confirmado, el registro del Partido Esperanza Ciudadana en Puebla", 4 de noviembre de 2006. Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/222765/confirmado-el-registro-del-partido-esperanza-ciudadana-en-puebla/>
- RODRÍGUEZ ARAUJO, Octavio. (2016). *Derechas e izquierdas al 2018*, en *La Jornada*, 16 de junio de 2016. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2016/06/16/opinion/016a1pol>
- STATUS. (2014). "Los Hank con Moreno Valle", 6 de julio de 2014. Disponible en: <http://www.statuspuebla.com.mx/2014/07/06/los-hank-con-moreno-valle/>.
- UGALDE, Luis Carlos. (2010). "Por una democracia liberal (Para erradicar el clientelismo)", *Nexos*, 1 de febrero de 2010. Disponible en: <http://www.nexos.com.mx/?p=13505/>

REFERENCIAS DE PORTALES ELECTRÓNICOS CONSULTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS.

Portales gubernamentales.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Boletines de prensa. En <http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/>.
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. Actas de cabido. En <http://www.pueblacapital.gob.mx/iv-actas-de-cabildo>.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Página de Transparencia. En <http://transparencia.puebla.gob.mx/>.
PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX). Contratos integrales de exploración y producción. En <http://contratos.pemex.com/Paginas/inicio.aspx>.
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL. Títulos de concesión. En <http://www.gob.mx/sct>.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. <http://sfa.puebla.gob.mx/> y <http://www.licitaciones.puebla.gob.mx/>.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MINERA. Expedición de títulos de concesión minera. En http://www.siam.economia.gob.mx/es/siam/p_Titulos_y
<http://www.cartografia.economia.gob.mx/cartografia/#>

Portales de periódicos y revistas electrónicas.

ANIMAL POLÍTICO. <http://www.animalpolitico.com/>.
ARISTEGUI NOTICIAS. <http://aristeguinoticias.com/>.
DIARIO CAMBIO. <http://www.diariocambio.com.mx/2016/>.
E-CONSULTA PUEBLA. <http://www.e-consulta.com>.
EL ECONOMISTA. <http://eleconomista.com.mx/>.
EL POPULAR. <http://www.elpopular.mx/>.
EL SOL DE PUEBLA. <https://www.elsoldepuebla.com.mx/>.
EL UNIVERSAL. <http://www.eluniversal.com.mx>.
INTOLERANCIA DIARIO. <http://intoleranciadiario.com/>.
LADO B. <http://ladobe.com.mx/>.
LA JORNADA. <http://www.jornada.unam.mx/>.
LA JORNADA DE ORIENTE. <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/>.
MILENIO. <http://www.milenio.com/>.
NEXOS. <http://www.nexos.com.mx/>.
PROCESO. <http://www.proceso.com.mx/>.
PUEBLA NOTICIAS. <http://www.pueblanoticias.mx/index.php>.
SIN EMBARGO. <http://www.sinembargo.mx/>.
STATUS PUEBLA. <http://www.statuspuebla.com.mx/>.

Portales de empresas.

ALMADEN MINERALS LTD. <http://www.almadenminerals.com/ESPANOL/Almaden.html>
CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA WILLIAM O. JENKINS. <http://www.convenciones-puebla.com.mx/recinto.html>.
COMPAÑÍA CONTRATISTA NACIONAL (COCONAL). <http://www.coconal.com/historia/>
CONSORCIO AGUA DE PUEBLA (antes Concesiones Integrales). <http://www.aguapuebla.mx/>.
CONSORCIO ARISTOS, S.A.B DE C.V. (APYCSA, TEPSA, RESA, PRESORZA). <http://www.consorcioaristos.org/es/>.
EVERCORE, S.A. DE C.V. <http://www.evercore.com.mx/2sobreprotego.html>.
GRUPO ESTRELLA ROJA. <http://blog.estrellaroja.com.mx/historia/#1461805686354-442a4006-3c68>.
GRUPO SORDO MADALENO. <http://www.sordomadaleno.com/gsm/es/properties/angelopolis/>.
INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS (ICA). https://www.ica.com.mx/es_ES/web/ica/autopista-mexico-tuxpan.
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL CONCESIONES). <http://www.ohl.es/sala-de-prensa/noticias/2014/agosto-2014/140820-contrato-de-concesion-del-libramiento-elevado-de-puebla-en-mexico/>.
PLANTA AUDI EN MÉXICO. <http://www.audi.com.mx/mx/brand/es2/audi-en-mexico/planta-de-audi-en-mexico.html>.
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V (PINFRA). <http://www.pinfra.com.mx/index.html>.